

Córdoba, 19 de agosto de 2021.-

## RESOLUCIÓN GENERAL Nº 67

### Y VISTO:

El artículo 1º inciso c) de la Ley Nº 10545, modificado por la Ley Nº 10739.

### Y CONSIDERANDO:

Voto del Presidente, Mario A. Blanco, y de los vocales José Luis Scarlatto, Luis A. Sánchez y Walter Scavino.

I. Que la Ley 10739 ha introducido modificaciones a la Ley Nº 10545, estableciendo: *“Artículo 1º.- Las facturaciones que emitan los entes distribuidores o quienes fueran responsables de la facturación del cobro de prestaciones de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, agua y saneamiento, previa autorización del ente regulador del servicio (...), deben contener (...) c) El cargo de la energía consumida para uso público de la comunidad que no podrá superar el diez por ciento (10%) de lo facturado por la energía suministrada a cada usuario (...) **El porcentaje previamente referido se ampliará hasta el quince por ciento (15%) en el caso de los municipios y comunas de menos de cincuenta mil (50.000) habitantes. En ese supuesto, los municipios y comunas antes referidos deben requerir autorización expresa al Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP), presentando los informes correspondientes que justifiquen la aplicación del incremento previsto en el presente inciso...**”* (el énfasis ha sido agregado).

Que en ese marco, sin perjuicio de los topes establecidos por el ahora modificado artículo 1º inciso c) de la Ley Nº 10545, resulta conveniente tomar en cuenta los criterios de aplicación de la Resolución General ERSeP Nº 10/2018, conforme a lo expuesto en el artículo 1º de la Orden de Servicio ERSeP Nº 01/2018, en la que se definió oportunamente el concepto de “uso público”, enumerando taxativamente los destinos de la energía eléctrica bajo él encuadrados.

Que en el artículo 2º de la misma Orden de Servicio del ERSeP, se estableció el mecanismo de determinación y aplicación de las percepciones y, en el artículo 3º, el procedimiento de verificación conforme a los topes oportunamente vigentes, ahora modificados por la Ley Nº 10739.

Que el artículo 4º de la Orden de Servicio analizada, estableció que sus alcances serían de aplicación directa y operativa -sin necesidad de previa intervención del ERSeP- para todas las Prestadoras de la Provincia de Córdoba, siempre que la percepción resultante se ajustara al tope oportunamente previsto del diez por ciento (10%), lo cual guarda relación con la aplicación del tope definido con posterioridad por la Ley Nº 10545.

Que por lo tanto, en el marco de lo establecido por la Ley Nº 10545 y considerando la reciente modificación introducida por la Ley Nº 10739, se entiende pertinente mantener en vigencia los aspectos abordados por la Orden de Servicio ERSeP Nº 01/2018, en tanto no se opongan a las previsiones de las leyes referidas y a lo que seguidamente se dispone en la presente resolución.

**II.** Que adicionalmente a lo indicado en el apartado precedente, dado su carácter y naturaleza, debe entenderse que resultan encuadradas bajo el alcance de la definición de “carga de la energía consumida para uso público de la comunidad”, a los fines de determinar el porcentaje a percibir, tanto el costo del consumo efectivamente suministrado para uso público a lo largo del período que se tome como referencia para el análisis -Período de Referencia-, como también las sumas que conformaren deudas preexistentes por dicho concepto, al final del mismo período.

Que en virtud de ello, dentro de los destinos de la energía eléctrica para uso público previstos en la Orden de Servicio ERSeP Nº 01/2018, se podrán computar los importes adeudados por la energía suministrada a tales fines.

Que con dicho objeto, será condición necesaria que el Municipio o Comuna acredite encontrarse al día y/o la materialización del pertinente plan de pagos con el Prestador del Servicio Eléctrico respectivo.

**III.** Que por otra parte, en función de la modificación efectuada por la Ley Nº 10739, respecto del artículo 1º inciso c) de la Ley Nº 10545, resulta necesario establecer el procedimiento y requisitos mínimos que deberán cumplimentar los Municipios y Comunas con menos de cincuenta mil (50000) habitantes, a los fines de obtener la autorización aludida en dicho marco normativo.

Que en tales casos, para los cuales la Ley Nº 10739 admite la ampliación del tope inicialmente fijado en un diez por ciento (10%), elevándolo hasta el quince por ciento (15%), de modo tal de asegurar que en Ciudades y Localidades con menor cantidad de habitantes se logre percibir el importe suficiente para el pago del cargo por la energía consumida para uso público, recae en tales órganos municipales

o comunales el deber de solicitar al ERSeP la autorización expresa para hacerlo, acompañando los informes correspondientes, en carácter de declaración jurada, y la documentación respaldatoria que justifique la aplicación del incremento.

Que en consecuencia, dado que la viabilidad legal de la ampliación requiere de la debida acreditación de la normativa municipal o comunal, los destinos del uso de la energía eléctrica y los importes necesarios a fin de afrontarlos, resulta razonable que para la implementación de la modificación de la Ley N° 10545 introducida por la Ley N° 10739, se disponga que los Municipios y Comunas alcanzados soliciten el incremento de la alícuota, si fuere necesario, y aporten toda la información pertinente a los fines del cumplimiento de la normativa provincial, en especial las ordenanzas vigentes en su jurisdicción y la cantidad de población.

Que así también, dada la especificidad de la información requerida a los fines del cálculo, los Prestadores del Servicio Eléctrico deberán aportar, en coordinación con la presentación de la solicitud municipal o comunal, también en carácter de declaración jurada, la información relativa a los consumos de los Municipios y Comunas que resulten afectados al uso público de la comunidad a lo largo del Período de Referencia, conformado por el año finalizado tres (3) meses antes de la fecha de cálculo, y los pasivos existentes al final del mismo, incluyendo capital e intereses, siempre que por estos se hubiere materializado el pertinente plan de pagos con el Prestador del Servicio Eléctrico respectivo y se lo acredite convenientemente. Todo ello de forma tal de demostrar la concurrencia de los presupuestos fijados en la Ley N° 10739.

Que efectuada la respectiva presentación ante el ERSeP, se extenderá la pertinente autorización, a través de la Gerencia de Energía Eléctrica.

Que en caso de detectarse falta de información que impida demostrar la determinación de la alícuota requerida, ello se informará al Municipio o Comuna correspondiente y/o al respectivo Prestador del Servicio Eléctrico, a los fines de requerir la información adicional que corresponda.

Que asimismo, si a partir de la información acompañada, se verificara que la alícuota aplicable para el pago de la energía destinada a uso público y los pasivos existentes por igual concepto, resultara diferente de la requerida, en la comunicación a emitirse de parte del ERSeP se indicará el valor autorizado. Sin perjuicio de ello, el Municipio, Comuna y/o el Prestador del Servicio Eléctrico podrán, dentro de los cinco (5) días hábiles de receptada dicha comunicación, elevar la

información adicional que estimaren pertinente con el objeto de respaldar el porcentaje requerido y/u otro diferente del autorizado, a los fines de su reevaluación.

Que por su parte, cada vez que de la implementación de los criterios vertidos en la Orden de Servicio ERSeP N° 01/2018, resulte necesario introducir variaciones en las alícuotas aplicables, siempre que resulten inferiores a las autorizadas de conformidad con el procedimiento detallado precedentemente, o cuando se verifique que deban mantenerse invariables, las mismas serán de instrumentación directa y operativa -sin necesidad de previa intervención del ERSeP- para todas las Prestadoras de la Provincia de Córdoba.

Que, asimismo, independientemente de la cantidad de habitantes del Municipio o Comuna de que se trate, en caso de existir pasivos impagos por energía consumida para uso público de la comunidad, cuya cancelación no superase el tope del diez por ciento (10%), los Prestadores del Servicio Eléctrico podrán efectuar el recálculo de la alícuota aplicable a fin de destinar el excedente resultante, luego del pago de las liquidaciones corrientes, a la cancelación de tales deudas, sin necesidad de autorización por parte de ERSeP.

Que no obstante las autorizaciones que se extiendan en cumplimiento de la Ley N° 10545 y modificación introducida por la Ley N° 10739, los Municipios y Comunas deberán comprometerse a poner el mayor esfuerzo en reducir el consumo de energía eléctrica destinada al uso público de la comunidad y consecuentemente las alícuotas aplicables a futuro.

**IV.** Que atento a lo dispuesto por el artículo 1° de la Resolución General ERSeP N° 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP N° 06/2004), el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en los casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de obra pública bajo su control, como también cuando se tratara de pautas de aplicación general atinentes a su funcionamiento y organización...”.

#### Voto del Vocal Facundo C. Cortes

Que la cuestión a resolver se vincula con el artículo 1° inciso c) de la Ley N° 10.545, modificado por la Ley N° 10.739, y la decisión de reglamentar su aplicación.



Que la sanción de la ley 10.545 reconoce como antecedente inmediato la Resolución General nro 10/2018 dictada por éste Ente Regulador de Servicios Públicos.

Que en ocasión del dictado de la mentada R.G. 10/2018, más precisamente en lo atinente a las tasas municipales y la actuación de agentes de percepción por parte de las prestatarias de servicios públicos, me expedí en los siguientes términos:

*“Que del análisis de la situación advertida precedentemente, resulta que las prestatarias del servicio eléctrico perciben en su condición de agentes de percepción y/o retención, tasas municipales o comunales, destinadas al financiamiento de otros servicios de uso público a cargo de los municipios, tales como el alumbrado o semaforización.*

*Que estas cargas tributarias toman como base imponible el consumo de energía eléctrica suministrada por las distribuidoras a las distintas categorías de usuarios.*

*Consecuencia de ello, tal como lo describimos en el acápite precedente, es la incorporación de otro importe en la factura ajeno a la prestación del servicio público de energía eléctrica.*

*Que aun reconociendo que éste concepto adicional integrado a la factura puede distorsionar y complicar la verdadera comprensión por parte del usuario de lo que le corresponde abonar, lo cierto es que la decisión de designar agentes de percepción y/o retención constituye una facultad soberana y exclusiva de los estamentos de gobiernos con potestad tributaria, conforme la facultad y autonomía que les reconoce el artículo 30 inc., 1° de la ley 8102, artículo 186 inc 4° de la Constitución Provincial y artículos. 5° y 123° de la Constitución Nacional, de modo que la facultad regulatoria de éste Organismo no puede involucrarse ni tomar decisiones que interfieran en el ejercicio de tal autonomía.*

*Que en función de lo dicho, el suscripto entiende que avanzar o interferir en la aplicación del tributo a través de una división o separación de la base imponible, limitando la obligación de ente designado como agente de retención y/o percepción a determinado porcentaje -tal como lo pretende el voto de la mayoría-, importa una decisión que excede las facultades regulatorias de éste Organismo de control, violentando principios y garantías expresamente consagrados en la Constitución Provincial y Nacional.*

*No puede soslayarse que éste Organismo tiene facultades de contralor y regulación respecto de las prestatarias de servicios públicos provinciales, pero ello no la autoriza a disponer medidas regulatorias sobre decisiones soberanas de municipios y comunas.”*

Que, coherente con el criterio expuesto en aquella oportunidad, ratifico que la materia objeto de regulación escapa al ámbito de competencia del Ersep, pues se trata de materia de exclusiva competencia de los estados locales (municipios y comunas), conforme el nivel de autonomía reconocido constitucionalmente. Consecuentemente, cualquier cortapisas al ejercicio de la autonomía tributaria local, importa lisa y llanamente desconocer aquella manda constitucional, en especial desde la reforma constitucional de 1994.

En efecto, el grado de autonomía para que el municipio pueda cumplir con sus fines, siempre fue y será resorte del derecho público local, y en ese orden la correcta inteligencia del artículo 5º de la Carta Magna así lo autorizaba; de modo que el actual artículo 123 de la Constitución Nacional ha venido entonces a consolidar con pautas claras y expresas que el Municipio integra la vida política del país y como tal debe contar con el grado de autonomía necesario para poder cumplir con sus fines, que no son otros que el bienestar de la comunidad que lo constituye y es su razón de ser.

Es con ese sentido que estimo indispensable y vital el respeto al principio de autonomía municipal entendida como un rasgo esencial del federalismo argentino. Por eso fue saludable y auspicioso que la Convención Nacional ratificara en la letra del artículo 123 el rumbo que habían tomado muchas provincias argentinas a partir de la sensata inteligencia que le asignaron al artículo 5º de la Carta Magna, en el sentido de que el régimen municipal importaba no sólo garantizar ese nivel de gobierno sino que éste debía contar con la autonomía necesaria para cumplir con sus fines.-

Es por lo dicho que entiendo que el límite y alcance de la potestad reglamentaria de los aspectos que hacen a esa autonomía (art. 123 de la C.N) se vinculan directamente con el cumplimiento de los fines del municipio. Insisto, es un atributo que se le reconoce a una comunidad natural fundada en la convivencia sobre la base de intereses comunes que llamamos “municipio” para que pueda cumplir y alcanzar sus fines. Cuando esa autonomía le sea negada o cercenada en modo tal que le impida cumplir con aquellos, deberá subsanarse con la intervención del Poder Judicial.

En consecuencia, aun cuando la restricción a la potestad tributaria municipal se haya instrumentado a través de una ley, en el caso la ley 10.545, modificada por la ley 10.739, entiendo que el reproche constitucional que le endilgue a la R.G. nro 10/2018, no se diluye ni desaparece, pues advierto de manera nítida que aquella viene a invadir el ámbito de autonomía local, poniendo en riesgo el cumplimiento de los fines del estado local

Ello así, pues el marco legal provincial y las resoluciones del Ersep, pretenden limitar una potestad tributaria, restringiendo la actuación del agente de percepción, pues le imponen un límite de actuación en tal carácter, atentando directamente contra la efectiva y eficiente recaudación de las tasas municipales.

Por lo expuesto, consecuente con el criterio expuesto en ocasión del dictado de la R.G. nro 10/2018, entiendo que no le corresponde al Ersep regular la ley 10.545, modificada por la ley 10.739, pues ambas avanzan inconstitucionalmente sobre la autonomía municipal.

Así voto.

Voto del Vocal Daniel A. Juez

Que conforme al artículo 1ro inciso c) de la Ley N° 10545, modificado por la Ley N° 10739, se introduce para los municipios y comunas de menos de cincuenta mil (50.000) habitantes, la posibilidad de ampliar los topes de la alícuota inicialmente fijada del diez por ciento (10%) elevándola al quince por ciento (15%) del cargo de facturación que cobra a cada usuario por energía eléctrica consumida para uso público de la comunidad(OIM).

Sin perjuicio de mantener la vigencia de los aspectos abordados por la Orden de Servicio ERSeP N°01/2018, y las condiciones que eventualmente debieran cumplir los Municipio o Comunas que solicitaren la respectiva autorización a este ERSeP, para la implementación y aplicación de la nueva alícuota del cargo de Ordenanza Impositiva Municipal –OIM-, esta Vocalía ya adelantó su voto negativo al respecto.

En efecto, para el tiempo en que fuera sancionada la referida ley 10545, como legislador provincial acompañé la aprobación de la norma, en la convicción que la naturaleza para la que fue creado el cargo de Ordenanza Impositiva Municipal (OIM) debía ser un porcentaje tal que, lo recaudado por los municipios y comunas sirviera para pagar **exclusivamente** la energía eléctrica efectivamente

consumida por los propios municipios en alumbrado público, semáforos e iluminación de sus edificios públicos.

Los “abusos” en las facturaciones de tasas y cargos extra que aumentaban la facturación neta de consumo energético requirió de un límite drástico del tope del 10(diez) por ciento que hoy, si bien sólo comprende a los municipios o comunas de menos de cincuenta mil habitantes, el concepto de “factor regulador” u “ordenador” del poder recaudador del Estado se flexibiliza y abre un potencial peligro para el bolsillo del usuario.

El contexto actual de gravísima crisis socio económica, agravada por la pandemia que aún sigue vigente, con sus nuevas cepas y una población aún sin inmunizar totalmente, obligan a advertir que la voluntad del legislador con la sanción de la ley 10545 fue la de marcar un “tope”, un límite a los abusos recaudatorios de ciertas comunas que no mostraban ni la creatividad, ni la voluntad política y empatía con sus vecinos. Aquel artículo 1° de la ley, con su anterior redacción, buscaba interpelar a todos los municipios y comunas por igual para que descubran otras maneras –no necesariamente siempre impositivas- de mejorar y/ o promover mejores condiciones para el desarrollo económico de su pueblo o ciudad.

Ya hemos mencionado los casos de las ciudades de Villa María y Bell Ville, En el 1er caso, cuando los concejales villamarienses aprobaron la ordenanza por la cual se **suspendía** el cobro del OIM hasta el 31 de marzo del corriente año- considerándose actualmente la extensión y prórroga de la medida – se marcaba el resultado positivo de la misma: aminora el impacto de los costos de energía eléctrica en la facturación total en un porcentaje del seis por ciento (6%) del sector de la industria y el 10% para los comercios. **Sin duda una medida que coloca la ciudad de Villa María con la menor tarifa energética.**

En el caso de Bell Ville, el gobierno de la ciudad ya ha expresado su voluntad de no adherir a la Ley provincial por reconocer que la ciudad **logró llevar el OIM por debajo del 10%** y su voluntad política es no aumentarlo, pues reconocen un beneficio para el ciudadano y los sectores económicos que deben afrontar la tarifa.

En conclusión, dos maneras distintas, pero ambas con un mismo fundamento. **El OIM es una tasa conceptualmente distorsiva, se crea una carga tributaria para el “cliente” con un servicio que el Municipio o comuna presta mal, de manera insuficiente o directamente no presta.**

En ambos casos, estas ciudades priorizaron las condiciones de capacidad económica del contribuyente y la responsabilidad del Estado en la gestión.



Esta profunda crisis económica y social que la pandemia agravó ha afectado a todos los sectores, a todos los hogares, a todos los bolsillos; y sin perjuicio de advertir la facultad abierta por la misma ley 10739 para aquellos los municipios y comunas de menos de cincuenta mil (50.000) habitantes, esta vocalía considera absolutamente desaconsejable abrir una puerta, que sin el correspondiente control, potencia una vía de abusos y distorsión recaudatoria, que siempre resta al bien común.

Por las razones expuestas, mi voto es negativo.

Así voto.

Por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los artículos 21, 25 inciso t), 28 inciso j) y concordantes de la Ley N° 8835 -Carta del Ciudadano- y las facultades otorgadas por el artículo 5° de la Ley N° 10545, **el Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP)** por mayoría (voto del presidente, Mario A. Blanco, y de los vocales José Luis Scarlatto, Luis A. Sánchez y Walter Scavino);

#### **R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1º: ESTABLÉCESE** que, en lo relativo a la implementación de las previsiones de la Ley N° 10545, modificada por la Ley N° 10739, salvo en lo que se oponga a la misma y/o a la presente resolución, se mantiene en vigencia lo dispuesto por la Orden de Servicio ERSeP N° 01/2018, quedando comprendidos en el cálculo de las alícuotas aplicables, los pasivos que por tales destinos se hubieran devengado.

**ARTÍCULO 2º: DISPÓNESE** que la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP extenderá las autorizaciones previstas en el artículo 1º inciso c) de la Ley N° 10545, modificado por la Ley N° 10739, de conformidad con las pautas previstas en el Considerando III de la presente resolución, cuando se trate de Municipios y/o Comunas de menos de cincuenta mil (50000) habitantes y cuya percepción deba ampliarse dentro de los límites allí establecidos.

Las alícuotas así autorizadas, resultarán aplicables a toda facturación que el respectivo Prestador del Servicio Eléctrico emita a partir del primer día del mes inmediato posterior a la obtención de la referida autorización y por el lapso de un (1) año.

**ARTÍCULO 3º: DISPÓNESE** que los Municipios y Comunas con menos de cincuenta mil (50000) habitantes, cuyo cargo de la energía consumida para uso público de la comunidad, calculado acorde a lo estipulado en el artículo 2º de la Orden de Servicio ERSeP N° 01/2018 y en el artículo 1º de la presente resolución, supere el diez por ciento (10%) de lo facturado por la energía suministrada a cada usuario, deberán solicitar la ampliación del porcentaje autorizado por la Ley N° 10739 mediante nota acorde al modelo incorporado como **Anexo I** de la presente resolución, suscripta por el respectivo Intendente o Jefe Comunal. Asimismo, habrán de acompañar el formulario incorporado como **Anexo II** de la presente resolución, debidamente completado por el Municipio o Comuna solicitante, juntamente con la documentación e información respaldatoria en él detallada, como también el formulario instrumentado como **Anexo III** de la presente resolución, confeccionado y debidamente completado por el Prestador del Servicio Eléctrico con jurisdicción en la zona del Municipio o Comuna de que se trate.

**ARTÍCULO 4º: DISPÓNESE** que, en caso de controversias, las mismas serán planteadas ante el ERSeP para la intervención de su competencia.

**ARTÍCULO 5º: PROTOCOLÍCESE**, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.